

## Dinámicas e interacciones en los procesos de resistencia civil<sup>1</sup>

Gloria Inés Restrepo

*“Cada vez, quedo más admirado al escuchar el gran conocimiento que existe sobre las situaciones de violencia que estamos viviendo y sobre las causas que las explican, pero entonces siempre me pregunto, y quiero ahora preguntarles a ustedes: teniendo este gran conocimiento sobre el problema de violencia social que tanto sufrimiento ha producido y tanto daño ha causado ¿por qué es que no se resuelve? ¿qué es lo que no está dejando que todos estos conocimientos tan admirables produzcan una solución real al problema?” Miembro ATCC (Sanz: 1998, p. 90)*

Entre el 2001 y el 2003 múltiples sectores de la sociedad colombiana se asombraron ante las noticias de poblaciones que se defendían frente a los ataques de los grupos armados sin más armas que sus propios símbolos. Se registraron entonces imágenes y relatos de poblaciones (especialmente del Cauca) que “armadas” con velas, chirimías, banderas blancas, palabras salían a exigirle a los grupos armados que abandonaran sus municipios. Esta ola de “resistencias en caliente” como las denominaría Jorge Hernández (Hernández: 2002, pp. 25-46) motivaron múltiples discursos de actores que encontraron en la “resistencia civil” una justificación legíti-

---

<sup>1</sup> El presente artículo refleja las conclusiones de la monografía de pregrado de sociología “Dinámicas e interacciones en los procesos de resistencia civil: Estudio de caso comparado entre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare”. Mayo de 2005. Director: Ricardo Peñaranda

ma para sus posiciones y acciones.<sup>2</sup> Frente a los riesgos que podría implicar la creciente vaguedad del concepto de resistencia se imponía realizar algunas precisiones no sólo desde la teoría sino también desde las lecciones mismas que dejaba la práctica.

Los hechos mismos de resistencia civil mostraban además la posibilidad de acercarse al conflicto armado desde una versión diferente a la proporcionada por los actores armados o por los sofisticados modelos de pensamiento. Estudiar las experiencias de resistencia permitía conocer la versión de actores que, sin necesidad de extensos discursos o complejas teorías, han emprendido acciones civiles frente a la guerra. Acciones que de algún modo le muestran a la teoría social que los actores tienen un cierto margen frente a las imponentes estructuras sociales. Estos argumentos se constituyeron en una motivación suficiente para emprender un trabajo de grado sobre el tema.

Las “resistencias en caliente” registradas entre el 2000 y 2003 no eran una novedad. De alguna manera constituían una expresión del cambio en las formas de movilización, especialmente de los pobladores rurales en los últimos 20 años. Cambio caracterizado por:

1. La búsqueda de autogestión o representación directa en el estado tras fallidos intentos de establecer canales de comunicación y representación;
2. El paso de la centralización organizativa a la multiplicidad de organizaciones campesinas con reivindicaciones locales;
3. La ampliación de las tradicionales demandas por la tierra, a aspectos políticos, cívicos, ambientales, económicos e incluso privados; y
4. El cambio de las tradicionales alianzas con partidos, a la multiplicidad de alianzas organizativas con ONG, sectores de la iglesia y otras organizaciones nacionales e internacionales. (Prada, Salgado: 2000)

Las movilizaciones originadas en comunidades indígenas, afrodescendientes o campesinas, apoyadas por la iglesia y ONG's, que pretendieron incidir y transformar las dinámicas de violencia locales, y reivindicar el derecho a la vida (entendida no solo como sobrevivencia sino también como autonomía, dignidad e integridad) ya tenían importantes antecedentes en el campo colombiano. El proyecto NASA (Cauca), la Asociación Campesina Integral del Atrato (Chocó), la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Santander), el proyecto global de Jambaló (Cauca), las Comunidades de paz (Urabá), las declaraciones de neutralidad Activa (Antioquia), las Asambleas Municipales Constituyentes (Antioquia, Santander, Nariño), los procesos de

---

<sup>2</sup> En el discurso de la “resistencia civil” se escudaron músicos, funcionarios públicos, industriales, Organizaciones no gubernamentales, entre otras, al punto de convertirlo en un término vago.

consulta popular (Cesar, Santander, Caldas, Meta) son apenas una muestra de los procesos de resistencia emprendidos desde 1980.<sup>3</sup> No era una sorpresa entonces el desarrollo de las “resistencias en caliente” pero sí una evidencia de un proceso en curso.

¿Qué podían tener en común movilizaciones tan diversas?, ¿por qué empezaron a ser identificadas como experiencias de resistencia civil? Los teóricos y estudiosos de las experiencias coinciden en definir a estos procesos como acciones

- *Públicas y transparentes*, en tanto necesitan difundirse para poder evidenciar sus demandas y propuestas.<sup>4</sup>

- *Voluntarias y concientes* pues es imposible presionar a alguien a que se rebelde contra una injusticia. Solo el colectivo o el individuo que percibe un dominio como opresivo, discriminatorio e injusto y como un riesgo contra sus vidas, pertenencias y bienes, puede decidir el comienzo de una acción de resistencia. Se trata de una praxis ética frente a las transgresiones de un dominio particular por eso es completamente voluntaria y conciente.<sup>5</sup>

- *No violentas*. Dentro de la amplia gama de formas de resistencia cabe la posibilidad del desarrollo de acciones armadas que también pueden pretender oponerse a la injusticia, el despotismo y la opresión. Sin embargo cuando se le agrega el calificativo de civil a la resistencia se cierra la posibilidad de optar por la vía violenta. El fundamento mismo de la resistencia civil está entonces en el desarrollo de estrategias no violentas que se sustentan en el poder de una masa activa, firme y comprometida y no en el poder de las armas. Resultaría contradictorio denunciar las injusticias a través de otra injusticia: la eliminación del otro.<sup>6</sup>

Sin embargo, los contrastes entre la discusión teórica y los datos empíricos dejan preguntas alrededor de la efectividad de estas experiencias cuando no se presentan en contextos democráticos sino en democracias turbulentas;<sup>7</sup> las causas de los procesos; la motivación de los individuos para emprender estas acciones cuando son pocas las posibilidades de éxito; los alcances y límites de la organización; y la finalidad de las acciones de resistencia.

<sup>3</sup> Para una mayor ilustración sobre estos casos, véase Hernández (2004).

<sup>4</sup> Sobre el carácter público de la resistencia profundizan autores como Thoreau (1987).

<sup>5</sup> Tal vez es este uno de los aspectos en los que más han profundizado las teorías sobre la resistencia civil. Desde Etienne de la Boettie hasta Tolstoi o Camus han mostrado a la resistencia como una acción de libertad de los individuos. La relación dominación-resistencia ha sido trabajada entre otros por Rawls, Malem o Dworkin

<sup>6</sup> En la explicación del carácter no violento de la resistencia civil es obligada la lectura de los textos de Gandhi, Luther King, Rawls y Habermas.

<sup>7</sup> Caracterizadas según Francisco Gutiérrez por la baja institucionalización, los altos grados de incertidumbre y la existencia de múltiples árbitros.

Comprender los procesos de resistencia civil en el caso colombiano es cuestión de múltiples trabajos. Sin embargo, la comparación y descripción de algunos casos podría brindar respuestas. Por esta razón decidí centrar mi monografía de grado en casos de resistencia civil organizada en tanto las resistencias cotidianas resultan casi imposibles de medir. Me limité también a casos de comunidades campesinas pues en estos no existen las bases identitarias y de solidaridad con que cuentan las experiencias de origen étnico y es éste el sector que parece más vulnerable ante los procesos de desubjetivación, desespacialización y destemporalización que genera la guerra.<sup>8</sup> Apelé finalmente a los casos más antiguos de resistencia civil campesina colombianos: la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. La descripción se basó en 4 preguntas básicas: ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? y se fundamentó en las discusiones propuestas por los teóricos de la acción colectiva y los movimientos sociales. En el presente artículo reúno entonces algunos aspectos fundamentales de la descripción y análisis de estos casos como insumo para futuras investigaciones sobre el tema.

## 1. ¿Dónde? La resistencia en la frontera

Las preguntas sobre los referentes geográficos de las experiencias de resistencia civil llevan a reflexiones profundas sobre el concepto de “espacio”. En sus análisis sobre el pacífico colombiano Ullrich Oslender ha mostrado que este concepto está lejos de ser neutral o de limitarse a coordenadas geográficas. Según el autor el espacio es político y estratégico, contiene múltiples interpretaciones, intereses y prácticas, que se tejen en el devenir de la historia. (Oslender: 2002) No era posible entonces responder a la pregunta de ¿Dónde surgen los procesos de resistencia? sólo con referentes geográficos, era necesario preguntarse por el significado e implicaciones de resistir en zonas de frontera.

Resistencias de frontera en tanto los procesos estudiados se ubican en zonas limítrofes interdepartamentales (de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Cesar) en el caso del Magdalena medio; y límites interdepartamentales (entre Antioquia, Chocó y Córdoba) e internacionales (con Panamá) en el caso de Urabá. Según el ordenamiento territorial esas zonas fronterizas no son reconocidas como regiones, pero lo son de facto. Están constituidas por fragmentos departamentales y municipales, sus límites aparecen o desaparecen de modo flexible y poseen particulares procesos productivos, políticos, simbólicos e históricos. (Alonso: 1997, pp. 1-4)

---

<sup>8</sup> Términos acuñados por Pecaú quien muestra como los procesos de terror en el campo inducen efectos de fragilización de los territorios, hacen estallar los referentes temporales y ponen en peligro la posibilidad de afirmarse en medio de referentes contradictorios.

Sus dinámicas no permiten una articulación física, económica, política o cultural con el “proyecto nacional”. Sin embargo, allí confluyen intereses múltiples y diversos atraídos o por una ubicación privilegiada para acciones militares; o por su potencial en tanto enclaves de comunicaciones; o por la concentración de recursos naturales poco explotados.

Esa combinación de posibilidades y de aislamiento explica la histórica afluencia de migrantes de los más diversos lugares del país. Son grupos sociales heterogéneos que integran en esos territorios sociedades multipolares, multiétnicas y plurirregionales, según la caracterización de María Teresa Uribe, porque allí se confunden las diversidades de etnias, clases sociales, lugares de origen e intereses. (Uribe:1992, pp.78-79)

Sociedades regionales conformadas por grupos humanos históricamente excluidos, que actúan bajo una institucionalidad precaria y por fuera de los límites y las características impuestas a la sociedad integrada por su proyecto político, social, cultural y económico. Territorios representados por la “sociedad nacional” como zonas selváticas, insalubres y cuna de múltiples enfermedades; habitados por una sociedad anómica y de barbarie, asociada a la criminalidad, la corrupción y la insubordinación.<sup>9</sup>

Esta percepción ha justificado los proyectos civilizadores de la sociedad antioqueña, interesada en hacer suyo un territorio por donde pudiera salir al mar. (Steiner: 2000) También sirvió de excusa a los proyectos militares del Magdalena Medio, que al mismo tiempo favorecieron procesos de extracción de recursos para beneficio de sectores particulares políticos y económicos.

La confluencia de variados intereses en esas zonas representadas por la “sociedad establecida” como de barbarie configuraron difíciles situaciones de conflicto y violencia que convirtieron esos territorios en “fronteras de guerra,” en donde aparecieron territorialidades privadas con actores no necesariamente estatales y con capacidad para asumir el control económico, militar y político. (Ramírez: 1993)

La reacción de la sociedad nacional frente a estas “fronteras de guerra” se manifestó en acciones para convertirlas en Zonas Especiales de Orden Público, que fue la figura que adoptó el intento para integrarlas al proyecto nacional a través de la acción militar. En los últimos años y después de largas décadas de confrontación se expandió la idea de estas regiones como “zonas pacificadas” en las cuales es posible invertir. Los métodos, costos y veracidad de esa pacificación no son claros, sin embargo.

Más allá de las precisiones geográficas y las representaciones sociales, estas zonas se definen por los significados y usos que les han dado los múltiples actores sociales que las han vivido, transformado y construido a través del tiempo. Los complejos y variados procesos de poblamiento se constituyen entonces en la fuente de sentido de estos espacios significados por:

---

<sup>9</sup> Sobre las representaciones de las zonas de frontera resultan relevantes los trabajos de María Teresa Uribe, Manuel Alonso, Clara Inés García y Claudia Steiner.

• *La marginalidad*: Desde la época colonial Urabá y el Magdalena Medio se mantuvieron al margen del proyecto nacional. La marginalidad se explica históricamente: por proyectos conquistadores frustrados por radicales procesos de resistencia indígena; legalizaciones territoriales impedidas por las disputas de intereses entre los mismos “conquistadores”; proyectos de infraestructura fracasados por las cambiantes políticas de la corona española y, posteriormente, de los gobiernos republicanos, entre otras.<sup>10</sup>

Los infructuosos intentos por controlar estos territorios permitieron que allí no se lograra dar paso a la etapa colonial. Durante casi cuatro siglos estas zonas se constituyeron en espacios vacíos, marginados de los centros urbanos y del control del poder central. (Uribe: 1992) Tal marginalidad produjo en el Magdalena Medio un efecto de aislamiento territorial y, en el caso de Urabá, generó la integración a dinámicas sociales y económicas foráneas relacionadas con el comercio ilegal del Caribe. La marginalidad propició sin embargo, que las dos regiones se convirtieran en zonas de refugio y resistencia para todos los que no cabían en los estrechos márgenes del “proyecto nacional”: antiguos esclavos, indígenas que llegaron tras la disolución de los resguardos, combatientes derrotados de las guerras del siglo XIX., campesinos expulsados por la consolidación de las haciendas ganaderas.

• *La extracción*. Las sociedades asentadas en estas regiones se consolidarían en el siglo XIX tras el desarrollo de economías extractivas. La extracción de recursos convocó numerosos migrantes e impulsó modelos de desarrollo basados en la explotación improvisada y poco técnica de recursos naturales, sin planeación ni reinversión; modelos pensados desde intereses externos y no desde las necesidades de los habitantes de la región.

Las economías del caucho, la tagua, la quina, la madera, la raicilla de ipecuana generaron entonces un impresionante flujo de recursos, sin impactos favorables en el desarrollo social y económico regional. Dejaron sin embargo caminos, asentamientos, relaciones de poder, migrantes y conflictos sobre los que se edificaría el futuro de estas regiones.<sup>11</sup>

• *El refugio*. La histórica tendencia de estas regiones a constituirse en refugio de población excluida, se mantuvo en el siglo XX. En su primera mitad arribaron allí los campesinos expulsados de sus lugares de origen tanto por la violencia política como por la violencia estructural.

---

<sup>10</sup> Al respecto resultan pertinentes en el caso del Magdalena Medio los textos de Ayala (1999), López (1991) y Ramos (2000). En el caso de Urabá se presenta una amplia ilustración en los textos de Parsons (1996), Steiner (2000) y Uribe (1992).

<sup>11</sup> Para la comprensión de las historias de extracción en estas regiones resulta pertinentes los datos aportados por Alonso (1997), Vargas (1992) y Steiner (2000).

Migraron entonces, desde diversas regiones, cientos de pobladores liberales que encontraron allí zonas de refugio, libres de los mecanismos de control de los conservadores. La policía chulavita sin embargo llegaría pronto a Urabá y al Magdalena Medio. También hicieron temprana presencia las guerrillas liberales que configuraron una serie de contactos y corredores fundamentales para el posterior establecimiento de las guerrillas de izquierda. Las sociedades regionales nacieron entonces fragmentadas por intereses políticos, bajo controles institucionales y contrainstitucionales.<sup>12</sup>

El refugio brindado por estas regiones no sólo fue político, también económico. Llegaron allí migrantes motivados por la posibilidad de emplearse en las grandes empresas de petróleo y banano, también buscaron refugio cientos de trabajadores que pretendían ofrecer sus servicios al creciente mercado regional.

Estas empresas se constituyeron en enclaves económicos con costosas implicaciones para toda la región. Aparecieron procesos de proletarización campesina, se generaron demandas poblacionales imposibles de sortear por los municipios, las expropiaciones a los colonos transformaron las relaciones de poder, se perpetuó un modelo de desarrollo extractivo pensado por personas externas a la región, entre otras. Tales implicaciones produjeron una grave situación social que estalló en múltiples conflictos agrarios, laborales y cívicos.<sup>13</sup>

Si bien el Carare y el Corregimiento de San José de Apartadó se organizaron como zonas de economía campesina al margen de los enclaves empresariales, fue inevitable que sufrieran algunos de sus impactos. Hasta allí llegaron las influencias de la nueva estructura de poder, las reivindicaciones de los nacientes movimientos sociales y las masas de migrantes expulsados por las economías empresariales. Los corregimientos del Carare surgieron de la migración de campesinos de diversas regiones que vivían de la extracción de maderas y esmeraldas, San José por su parte surgió por la migración de familias paisas y vallunas que basaron su economía en la productividad campesina.

- *La violencia.* Tan complejo panorama social desencadenó sensibles niveles de violencia en estas regiones. Escenarios de múltiples conflictos bajo el marco del Frente Nacional, en estos territorios se instalaron las guerrillas con sus proyectos políticos de sustitución del orden estatal. Estos grupos fueron acatados por los campesinos como sustituto de los entes institucionales que debían atender y controlar la región. En el caso del Magdalena Medio predominó la acción de las FARC y el ELN (Alonso: 1997), en Urabá se impusieron el EPL y las FARC (Salgado: 1992, pp. 57-63). Bajo el marco

<sup>12</sup> Los hechos de “la Violencia” de los 50 quedan plasmados en los textos de Alonso (1997), Vargas (1992), Roldan (1998) y Salgado (1992)

<sup>13</sup> Las dinámicas generadas por la economía petrolera son trabajadas en detalle por Alejo Vargas en 1992. El análisis de los impactos de la economía bananera se encuentra en los textos de Clara Inés García (1996), Gerard Martin (1986) y Claudia Steiner.

de la Doctrina de Seguridad Nacional estas regiones fueron militarizadas. A través de acciones de represión y políticas de orden público, los gobiernos pretendieron resolver el complejo problema social de estas regiones. Sin embargo, la acción del ejército que logró diezmar la acción de las guerrillas, no disminuyó los niveles de violencia. (Botero: 1990, p. 140)

En el Magdalena Medio la confrontación se agudizó de manera importante en la década del 80 cuando apareció un tercer actor: los paramilitares. La estrategia paramilitar era la de tierra arrasada para liberar territorios de la presencia de la guerrilla y a favor de la gran propiedad. (Medina: 1990, p 186) Con estrategias similares apareció este actor en 1987 en la subregión norte de Urabá y en 1993 extendió su acción hacia el eje bananero. (Pastoral Social:2001, p46-52). Antes de la irrupción de los paramilitares Urabá vivió un largo período de confrontación protagonizado por el EPL y las FARC que se disputaron el dominio regional y generaron complejos procesos territoriales. (García;1996, pp. 85-153)

Los paramilitares hicieron presencia permanente y pública en varios municipios: regulaban la vida cotidiana y transformaron la estructura de propiedad. (Pastoral Social:2001, p51). Gracias a su presencia, el narcotráfico obtuvo una masiva compra de tierras. En respuesta los grupos insurgentes aumentaron sus frentes, adelantaron ataques contra las supuestas bases de la autodefensa y movilizaron sus bases sociales en contra de la violencia del adversario. (González: 2002, p. 127)

Urabá y el Magdalena Medio, que eran territorios *de* guerra, pasaron a ser territorios *en* guerra. Y de la guerra de posiciones se llegó a la guerra por territorios. Las regiones se convirtieron en una superposición de territorios contraestatales y paraestatales en permanente disputa. (Pastoral Social: 2001) Esas luchas territoriales produjeron importantes dinámicas de desplazamiento y repoblamiento que transformaron nuevamente el sentido de lugar regional.

*Resistir en la frontera* implica entonces resignificar complejos panoramas regionales y locales. No se trata solo de definir y proclamar el propio territorio como zona al margen del conflicto armado. Se trata de redimensionar cada uno de los aspectos que influyen sobre el espacio regional y que han llegado a ser factores estructurantes del conflicto. Se trata en últimas de:

- Asumir el reto de construir sociedad y solidaridad en medio de la heterogeneidad y la marginalidad.
- Construir autonomía después de largas décadas de exclusión y a pesar de modelos de desarrollo ajenos.
- Establecer proyectos de desarrollo y economía campesina en zonas concebidas tradicionalmente como de tránsito, colonización y extracción.
- Defender la dignidad campesina tras una larga historia de atropellos.
- Garantizar tranquilidad en los momentos de mayor confrontación.

Las propuestas estudiadas sin embargo, redefinen el espacio, desde proyectos territoriales distintos. La ATCC ha basado su proyecto en los lazos de confianza establecidos durante el proceso colonizador y solo ha impuesto límites de acción no límites territoriales a los actores armados. Estos pueden continuar su paso por el territorio pero sin afectar a la población que lo habita.

“Eso son 27 veredas, hasta el salto toda esas veredas hasta la cordillera para acá es ATCC, hasta una quebrada que se llama la Corcovada porque ahí la autodefensa nos marcó lindero. Y la guerrilla de la cordillera para allá nos marcó lindero y dijeron: bueno de la cordillera para allá les respetamos, esa es su India, pero de la cordillera para acá no vengan, si vienen los matamos. Allá les respetamos la India, también nos dijo la autodefensa, de la Corcovada para acá no se metan. Cuando fuimos a ver el territorio ideológico nos quedo como lindero la corcovada y la cordillera” (Entrevista La India)

La Comunidad ha basado su proyecto en la firma de un compromiso individual y en la conquista de espacios comunitarios restringidos totalmente al accionar y paso de los grupos armados. Se empezó a hablar entonces de *comunidades de paz*.

Declaradas por la población no combatiente residente en el corregimiento, que libremente se comprometiera con los estatutos y reglamentos de la comunidad; en las que el estatuto de protección recae sobre la comunidad y no sobre el territorio por medio de las cuales se busca el respeto frente a todos los actores armados: guerrilla, ejército y paramilitares (Hernández: 1999).

Esta diferencia ha generado de un lado una mayor vulnerabilidad de la ATCC a las divisiones internas y ha ubicado a la comunidad de paz en una situación de mayor confrontación frente a los grupos armados. Grupos que independientemente del proyecto de resistencia han impuesto sus lógicas de guerra sobre los territorios comunitarios.

## **2. ¿Por qué? No sólo se resiste por el ascenso de la confrontación**

¿Por qué se emprenden acciones de resistencia en unas comunidades y no en otras que presentan condiciones similares?, ¿Qué puede motivar a los individuos a emprender estas acciones cuando son pocas las posibilidades de éxito? Tras años de discusión los teóricos de los movimientos sociales y de la acción colectiva han mostrado la impo-

sibilidad de encontrar unas causas últimas y estructurales (económicas, políticas o culturales) de tales procesos.<sup>14</sup> En tanto constituyen “sistemas de acción”<sup>15</sup> con dinámicas propias son el resultado de la combinación de factores estructurales con las lógicas de actores particulares.

Los factores estructurales aparecen en los aspectos productivos<sup>16</sup>, las relaciones de poder<sup>17</sup> y la construcción cultural<sup>18</sup> que a su vez son el resultado de las interacciones que se derivan de los procesos históricos regionales. Las lógicas de los actores pueden ser instrumentales, emocionales y normativas.<sup>19</sup> Para comprenderlas es necesario explorar las trayectorias de los líderes y los actores de los procesos.

Desde esta perspectiva parecen incompletas las explicaciones de la “resistencia civil” que se centran en la agudización de la confrontación y el ascenso de los indicadores de violencia. Sostener esta explicación implica comprender a la resistencia como una acción de defensa frente a una guerra aparentemente coyuntural. El estudio de los casos, sin embargo, permite comprender que la resistencia es mucho más compleja y obedece a una guerra que está anclada en todos los niveles de la estructura social. Al respecto se proponen algunas hipótesis:

*Se resiste para reivindicar una construcción social anterior a la guerra*

En los dos casos estudiados, los procesos de resistencia se originan y mantienen gracias a la existencia de unas solidaridades y un proceso organizativo anterior a la llegada de la violencia. Es el caso de solidaridades construidas a través de difíciles

---

<sup>14</sup> El surgimiento de “nuevos movimientos sociales” cuestiona las explicaciones marxistas centradas en la lucha por el control de los medios de producción y las funcionalistas enfocadas en las dificultades de integración a nuevos marcos normativos.

<sup>15</sup> Término acuñado por las teorías constructivistas de los movimientos sociales que discuten la comprensión del movimiento social como sujeto actuante en un escenario con un final predeterminado y definen a los movimientos como la unión de procesos simbólicos y cognitivos que permiten que los individuos redefinir una situación particular. (Laraña: 1999)

<sup>16</sup> Referidos a las manifestaciones particulares del Capital (actividades productivas, división del trabajo, distribución de la tierra)

<sup>17</sup> Definen las formas de gobierno, dominio y justicia. Obliga a indagar sobre las relaciones de poder, las dinámicas de partidos, la configuración de elites, la justicia, el dominio de los grupos ilegales...

<sup>18</sup> Nos lleva a preguntarnos sobre el proceso colonizador, la estratificación, la construcción social de normas, las religiones, entre otras.

<sup>19</sup> En cuanto a la decisión de los actores, las teorías muestran que estas resulta tanto de la lógica instrumental como de las normas sociales y motivaciones altruistas que construye un actor particular.

procesos de colonización protagonizados en el Carare por migrantes provenientes del Chocó, Santander, Antioquia y Caldas que huían de la violencia política y estructural<sup>20</sup> y en San José de Apartadó por campesinos antioqueños de Dabeiba, Peque y Urama que huían de la violencia bipartidista.<sup>21</sup> Para ellos, la colonización les daba la posibilidad de poseer tierras, de desarrollarse como individuos, como familias, como colectivos. Llegaron dejando atrás su pasado, y resignados a un inmenso desarraigo. Al principio llegaban solos, una vez lograban un poco de estabilidad avisaban a la familia y a los paisanos o conseguían familia en la zona buscando algún tipo de compañía y apoyo en la soledad. (García:1996, pp. 35-57)

Se apropiaron del territorio trabajándolo, después fue fundamental el desarrollo de organizaciones comunitarias, que les garantizaron los servicios básicos que el precario estado local no era capaz de proporcionar. Las Juntas de Acción Comunal gestionaron, escuelas, servicios básicos, infraestructura y solucionaron los conflictos. Por su parte, organizaciones agrarias como las ligas campesinas, en el caso del Carare, y cooperativas de productores, en el caso de San José de Apartadó, buscaron condiciones de comercio justo para el mercado de los productos agrícolas.<sup>22</sup> Se crearon también espacios comunes alrededor de los cultos religiosos, diversos en el caso del Carare (en donde hace presencia la Iglesia Católica, Pentecostal, Evangélica y Adventista)<sup>23</sup> centrados en la iglesia católica en el caso de San José de Apartadó.<sup>24</sup> Las prácticas religiosas influyeron en las concepciones particulares alrededor de la paz, la solidaridad, el trabajo comunitario, entre otras. El sentimiento y la práctica religiosa fundamentaron a la vez lazos sociales y divisiones entre sectores de la población.

Ese proceso organizativo fue afectado por la llegada de las FARC a las zonas. En el Carare la guerrilla impuso militarmente sus estructuras e ideologías a las organizaciones campesinas (Gómez: 1992, p. 96), lo que generó una menor hegemonía del grupo armado. En San José de Apartadó la situación fue distinta porque las organizaciones campesinas estuvieron acompañadas desde sus primeros años por el Partido Comunis-

<sup>20</sup> Sobre la migración al Carare es fundamental consultar los textos de Acosta (1993), García (1996) y Rodríguez (1982).

<sup>21</sup> Sobre la colonización de San José de Apartadó no se encontraron trabajos detallados sólo algunas referencias en artículos de prensa y en los textos de Uribe (2004); Montoya (2001); Ríos (2001), Ortiz (1996) y Parsons (1999)

<sup>22</sup> Resulta ilustrativo el caso de la cooperativa Balsamar analizado a fondo por Duque y Carmona (1996)

<sup>23</sup> Sobre las configuraciones religiosas en el Magdalena Medio y sus relaciones con las dinámicas de conflicto resultan de interés los trabajos de Lozano (2005) y PNR (1996)

<sup>24</sup> La relación religión conflicto en el caso de Urabá es trabajada por Ríos (2001)

ta. (Ortiz: 1999) Cuando llegaron las FARC, basaron entonces su dominio más en lo político que en lo armado, sin afectar la organización campesina tradicional.

La “llegada de la violencia”<sup>25</sup>, marcada en las dos zonas por la acción conjunta de ejército y paramilitares tuvo implicaciones distintas. En San José arrasó con los líderes comunitarios tradicionales, degradó el trabajo de las juntas de acción comunal, desplazó a los primeros pobladores del corregimiento, dificultó y casi imposibilitó el desarrollo del trabajo agrícola.

“Antes el pueblo era prospero, había comercio y se movía el pueblo, eso se acabo por la violencia, a la mayor parte de los fundadores los mataron y los otros se tuvieron que ir”. Ent. San José.

En el Carare desplazó a las familias tradicionales, eliminó a algunos líderes, transformó las formas de justicia pero sobre todo dividió a la comunidad.

“Se hablaba de la ley del silencio (...) era que ustedes tenían que aguantar lo que fuera. Por ejemplo le mataban a su papá y si usted iba a denunciar lo mataban también. Usted se tenía que quedar callado o irse. Aquí de este río para allá eso casi quedó solo (...)” (Ent. La India.)

Sin embargo, en los dos casos al intensificarse la confrontación surgió una reacción solidaria fundada en lo que se había logrado conservar de las estructuras y liderazgos configurados en el proceso de colonización anterior a la influencia y dominio de los grupos armados. Se podría decir entonces que en los procesos de resistencia se reivindica la organización social de los primeros años de colonización, aparecen como base sólida su autonomía, su poder creador de condiciones mínimas de vida y convivencia.

#### *Se resiste para reivindicar la economía y propiedad campesina*

Cómo se reseñaba en el apartado anterior, en las zonas estudiadas ha predominado una estructura económica regional caracterizada por la excesiva concentración de la tierra, la fuga de excedentes, la extrema dependencia de las fluctuaciones del mercado externo, el exterminio de los recursos naturales, el establecimiento de sistemas de endeude, el escaso crecimiento regional, entre otras.<sup>26</sup> Resultan entonces modelos de desarrollo en los que han predominado los intereses de acumulación de reducidos

<sup>25</sup> En la tradición oral de las dos regiones se entiende por “la llegada de la violencia” la entrada de los paramilitares.

<sup>26</sup> Sobre los procesos económicos generados en estas regiones resultan de interés los textos de Bejarano (1988), Martín (1995), De Roux (2002) y Estrada (1985).

sectores sociales a pesar de las necesidades de la mayoría. En el siglo XX esos modelos se han reflejado en el predominio de economías empresariales de petróleo<sup>27</sup>, banano<sup>28</sup>, palma<sup>29</sup>, entre otras. Tales economías han arrojado impresionantes indicadores de crecimiento económico, acompañados del alto impacto social que representa la transformación de los patrones tradicionales de migración, propiedad territorial, colonización campesina y empleo. (Ramírez:1996 p.35) Impacto que se hizo mayor gracias a la escasa reinversión de los empresarios por lo general foráneos y poco comprometidos con la región.

El modelo de desarrollo predominante en Urabá y el Magdalena Medio trajo consigo altos niveles de inequidad y conflictividad, tensiones y conflictos agrarios, cívicos y laborales, protagonizados por movimientos sociales con diferente grado de organización. Frente a tales conflictos, el estado históricamente ha sido incapaz de generar una intermediación efectiva. Bajo una aparente “neutralidad” mantuvo en las dos regiones una distancia calculada en la mediación y regulación de las diferentes tensiones sociales. A esa distancia se agregaron las omisiones y la ineficacia de las instituciones civiles y la contundencia de una respuesta militar ligada a la defensa de intereses privados. (Ortiz:1999) La regulación de las relaciones productivas quedó entonces al arbitrio del “más fuerte” a nivel político, económico y militar, por eso al Estado presente en estas regiones se le ha calificado como “Hipotecado”. (Pastoral Social: 2001)

No es extraño por tanto que en las dos regiones estudiadas, el conflicto armado haya permeado las relaciones de producción. Los actores armados no institucionales asumieron funciones del Estado, regularon los conflictos, influyeron en los movimientos sociales, o defendieron intereses empresariales, entre otras. (Bejarano: 1988) Se puede decir que en estas regiones las dinámicas de conflicto están determinadas y determinan la estructura productiva.

Los municipios de influencia de la ATCC y San José de Apartadó son zonas de economía campesina al margen del desarrollo empresarial. Estas economías están caracterizadas por sistemas de producción y tecnologías tradicionales, por el uso de mano de obra familiar, por una baja generación de ingresos y por una escasa planificación y participación en el mercado. Sin embargo, son economías campesinas que no han logrado sustraerse a las dinámicas del modelo extractivo y concentrador: recibieron los desplazados expulsados por la expansión de enclaves y haciendas; las afectaron los planes municipales de desarrollo que las desconocen y que centran su

<sup>27</sup>.Sobre los impactos de la economía petrolera Vargas (1992) y De Roux (2002).

<sup>28</sup> Sobre la economía bananera, véase Bejarano (1988) Martín (1995; 1986), Romero (2004) y García (1996).

<sup>29</sup> Sobre las siembras de palma africana véase Mignorance (2004).

inversión en el beneficio de sectores empresariales y ganaderos (Corpouraba: 1990); han estado constantemente amenazadas por los ciclos de endeude-expropiación (Molano: 1989); han notificado en su historia local que la expansión de los intereses privados corre paralela con el ascenso de los indicadores de violencia; entre otras... Frente a tales dinámicas surgieron en estos municipios propuestas de desarrollo alternativo y economía solidaria.<sup>30</sup>

Para los habitantes de las dos zonas estudiadas, la intensificación de la confrontación no se veía como un hecho accidental. El recrudescimiento de la guerra estaba ligado a la expansión de los intereses privados en las zonas de economía campesina. En el caso del Carare esa expansión privada ha consistido en la extensión de la economía ganadera y el narcotráfico<sup>31</sup>, en el caso de San José de Apartadó han sido los desarrollos de las economías extractivas y de proyectos de infraestructura.<sup>32</sup>

Se podría concluir entonces que en tanto el conflicto armado es alentado y sustentado por intereses económicos particulares, la resistencia civil se convierte en una respuesta económica. Es, en efecto, una defensa de las economías campesinas, una propuesta de desarrollo solidario al margen del ciclo de endeude expropiación, una protesta frente al exterminio de propuestas de cooperación y desarrollo alternativo, una reivindicación del derecho al trabajo, la tierra y la propiedad ganada a través del esfuerzo de años.

*Se resiste porque ningún orden garantiza mínimos de eficiencia y legitimidad*

El escalamiento del conflicto armado refleja además, en estas zonas, el fracaso de múltiples “órdenes”:

- *El orden estatal*, caracterizado en las dos zonas por una precariedad visible en la ineficacia y falta de legitimidad. Es ineficaz en cuanto a la prestación de servicios básicos para garantizar una vida digna en estas zonas, debido no solo a sus prolongadas ausencias sino también a que el clientelismo condiciona el acceso a los servicios públicos. Le falta de legitimidad porque ha sido incapaz de administrar justicia y de regular los conflictos cotidianos. (Ortiz: 1999, pp. 67-68). El Estado no es allí un referente simbólico de cohesión y representación, en consecuencia, la vida de “las fronteras” no se funda en los principios, normas y procedimientos establecidos institucionalmente.

---

<sup>30</sup> Además del caso de la Cooperativa Balsamar es relevante señalar el proceso de la Asociación de Municipios de Urabá. En el Carare surgen múltiples asociaciones de productores.

<sup>31</sup> En 1990, por ejemplo, los habitantes del Carare denunciaban en el Gran Foro por la paz en Cimitarra como el 5% de los propietarios tenían cerca del 70% de la tierra.

<sup>32</sup> En las diferentes entrevistas con los miembros de la comunidad surgen los temores por los intereses del capital privado en el corregimiento motivadas por yacimientos de carbón, construcción de infraestructura o siembra de palma.

Tampoco los partidos garantizan en estas zonas mínimos niveles de representación. Los partidos tradicionales funcionan por medio de vastas redes clientelistas que, aunque imparten favores, no logran niveles de representación y comunicación suficientes para incluir a estas zonas en el proyecto nacional. Los partidos “alternativos” (UP, FUP, ANAPO, UNO, entre otros) en los que los habitantes de estas regiones depositaron grandes expectativas, entraron en las lógicas clientelistas o fueron exterminados.<sup>33</sup> Los canales de comunicación para lograr alguna influencia en el Estado además de precarios, han sido perneados por las dinámicas de guerra.

La presencia del Estado en estos municipios de frontera se ha reducido a las acciones militares de “recuperación del orden público”.<sup>34</sup> Acciones con las que se ha pretendido resolver un histórico problema social y que han arrojado resultados escasos, costosos y contraproducentes. Aunque logran un repliegue de los grupos guerrilleros, dejan intactas las causas de la guerra y los índices de violencia regional. Los civiles, a su vez, han pagado un alto costo por las estrategias contrainsurgentes que han sido contraproducentes porque han profundizado la crisis de legitimidad del estado. Las estadísticas electorales y las transformaciones en las relaciones laborales muestran una estrecha relación entre la militarización y las demandas de los empresarios y las élites políticas locales.<sup>35</sup>

• *El orden guerrillero* es acogido por los campesinos del Carare (en 1966) y San José de Apartadó (en 1973) ante la incapacidad del Estado para proporcionar seguridad y justicia. En estas zonas predominó la acción de las FARC (Frentes IV y V) frente a otras guerrillas como el ELN, el EPL y el M19. La guerrilla encontró en estas zonas una ubicación estratégica, experiencias previas de “autodefensas campesinas” y la existencia de un trabajo político previo desarrollado por el Partido Comunista. Las FARC cumplían la función de guardias rurales, administraban la justicia entre los campesinos y desarrollaron un intenso trabajo político y de educación popular. En contraprestación esperaban la lealtad, colaboración y obediencia de los habitantes de estas zonas. (Uribe: 2004)

Pero la propuesta política y organizativa de la guerrilla tiene diferentes grados de acogida en las zonas estudiadas. En el Carare su discurso político tuvo poco impacto; esto se reflejó en la escasa adhesión a las propuestas del PC y la UNO y en las amplias

<sup>33</sup> Sobre el clientelismo en estas regiones fueron consultados Ortiz (1999, pp. 67-68) y Vargas (1992). La observación y las entrevistas permitieron también proponer algunas afirmaciones.

<sup>34</sup> En la historia de estas zonas es una constante la instalación de bases militares y batallones, la declaración de alcaldías militares, la imposición de salvoconductos para el tránsito, el amplio grado de acción de entidades como el DAS, entre otras. La literatura testimonial, por su parte, tiene múltiples referencias a las consecuencias de la militarización en las historias personales.

<sup>35</sup> Sobre la relación guerra-élites resulta muy ilustrativo el contraste de las cifras de homicidios con las estadísticas electorales y negociaciones sindicales. Autores como Mauricio Romero (2003) hacen importantes aportes al respecto.

votaciones hacia partidos tradicionales como el conservador. Sólo en Cimitarra tales propuestas convocaron el interés de la comunidad (Registraduría Nacional del estado Civil). En San José de Apartadó las ideas políticas de las FARC tuvieron mayor acogida, como se comprobó en votaciones masivas por movimientos pro-comunistas, que transformaron el panorama electoral de Apartadó dominado desde la década del 30 por el partido liberal. (Ortiz: 1999, p. 71) Esta diferencia explica la existencia de posiciones políticas diferentes entre las comunidades de estudio. Un punto que revela claramente tales diferencias es la posición de los campesinos frente a su incorporación al mercado y al Estado Nacional. El anhelo de inclusión provoca múltiples contradicciones entre los habitantes del Carare y la guerrilla. En San José de Apartadó, por su parte, la posición crítica frente a la acción del Estado es mucho más radical, por tanto las diferentes propuestas de inclusión resultan menos atractivas.

El orden guerrillero se ve sometido a múltiples fluctuaciones y cambios dados por las dinámicas de guerra, los cambios internos de los frentes, las políticas del estado mayor, entre otras. Tales transformaciones son particularmente evidentes en los primeros años de la década del 80 en el Carare. Allí el desdoblamiento y expansión de la guerrilla y la fuerte presión del ejército indujeron la presencia de grandes frentes conformados por jóvenes con escasa experiencia y poca formación política, que cometieron múltiples abusos contra las comunidades y que emprendieron una obsesiva lucha por detectar a posibles informantes del ejército y así resquebrajaron el esquema de justicia guerrillera.<sup>36</sup> En San José de Apartadó los cambios del orden guerrillero se manifiestan en las disputas de las FARC con el ejército, con el EPL y con grupos de contrainsurgencia privados. Declarar un “territorio de las FARC” dentro del mapa de guerra de Urabá<sup>37</sup> fue el detonante de las acciones contra la población civil de San José de Apartadó.

Así, el orden establecido por la guerrilla se vuelve en contra de los habitantes de estas zonas porque crea divisiones internas en la comunidad, por los desmanes de los mandos medios, por los señalamientos de los desertores, por la desprotección en la que dejan a las comunidades cuando llega un nuevo grupo armado, por los estigmas que les dejan como herencia. El orden y seguridad ofrecido por la guerrilla se desvanece entonces dentro de las mismas dinámicas de guerra.

---

<sup>36</sup> Este fenómeno se evidencia en múltiples testimonios cómo “la guerrilla tenía en lista a varias personas por ahí para matarlas (...) porque uno se puso bravo entonces fueron y lo indispusieron frente a la guerrilla y en ese tiempo cualquiera que dijera fulano de tal es esto (informante) ahí mismo le daban, de todas maneras la situación siguió así (...)” Entrevista La India. Alejandro García trabaja ampliamente este aspecto.

<sup>37</sup> Al respecto Carlos Miguel Ortiz hace algunas referencias mostrando la línea divisoria entre las guerrillas marcada por Currulao y Nueva Antioquia

• *El orden paramilitar surge con el apoyo del ejército y de diversos sectores económicos y políticos de la región.*<sup>38</sup> El proyecto paramilitar se estableció en dos etapas fundamentales. En una primera pretendieron “liberar” territorios a través del terror y la represión sistemática de la población campesina y urbana que pudiera tener nexos con la guerrilla. (Medina:1990 p.170) En esta etapa las comunidades de las dos zonas fueron sometidas a desplazamientos, bombardeos, amenazas, bloqueos, asesinatos, masacres, entre otras. Entre 1983 y 1987 los habitantes del Carare fueron acorralados por la acción de las autodefensas nacidas en Puerto Boyacá.<sup>39</sup> La represión paramilitar llegó a San José a través de la acción de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá entre 1993 y 1996. (Pastoral Social: 2001, p. 22). Las acciones paramilitares se desarrollaron a pesar de las denuncias que los habitantes de estas zonas formularon ante los representantes locales y nacionales del Estado.

En la segunda etapa, más política, los paramilitares intentaron fundamentar la obediencia de la población sobre bases distintas al miedo. Presentaron propuestas económicas que no necesariamente significaron desarrollo local y políticas que respondían a los históricos intereses de inclusión de los habitantes de los municipios de frontera. (Medina: 1990, p. 142). La acogida de estas propuestas fue diferente en las dos zonas gracias a la vigencia de ciertas posiciones políticas. El proyecto paramilitar dio lugar a una mayor represión cuando fracasaron sus propuestas políticas o aparecieron graves divisiones internas en las comunidades. De cualquier forma, someterse al dominio armado implicaba perder la libertad y dejar de lado la dignidad y la memoria de los muertos.

La larga experiencia de vida en medio de la guerra les muestra a los habitantes de San José de Apartadó y del Carare el fracaso de estos tres órdenes, la precariedad estatal en la prestación de seguridad y justicia, la fragilidad de la adhesión a cualquier grupo armado, el alto costo del desplazamiento, el sin sentido de abrir un nuevo ciclo de confrontación, la fragilidad de las propuestas políticas alternativas y la inminencia de una confrontación de largo plazo.

Las comunidades decidieron entonces recurrir a los mecanismos que en los primeros años de colonización les garantizaron niveles de eficacia y convivencia. Recurrieron a la organización comunitaria, fundamental en la construcción de infraestructura y también en la mediación de los conflictos cotidianos. *La resistencia civil* aparece como una respuesta organizada a la crisis de los múltiples órdenes presentes en las regiones marginales. Es de alguna manera la reivindicación de formas alternativas y locales de participación, gobierno y justicia.

<sup>38</sup> Afirmación demostrada por Carlos Medina Gallego en el caso del Magdalena Medio (Gallego:1990/1994) y por Mauricio Romero en el caso de Córdoba y Urabá (Romero: 2003)

<sup>39</sup> En la literatura testimonial del Carare son abundantes las referencias a estos años de Violencia. Resultan interesantes los textos de García (1998) y Zamora (1983)

*Se resiste por estrategia, por evitar sufrimiento y por deber moral*

No sólo las grandes estructuras económicas, políticas y culturales explican los posibles factores causales de los procesos de resistencia también lo hacen las lógicas individuales de los actores que emprenden tales acciones. En el caso del Carare el proceso se impulsa merced a la acción de líderes tradicionales que ganaron su posición por el éxito en la empresa colonizadora, por su capacidad de “hablar” (solucionar conflictos) y por su independencia frente a los grupos armados.

“(Los primeros líderes) habían sido gentes muy sufridas, el sufrimiento, los golpes, los encierros, los golpes en los batallones, los insultos en el campo, el atropello contra ellos por ser tan dueños de sus ideas por no ser personas fáciles de manejar como un títere a dejarse manejar del otro. (Ese sufrimiento les permitía) trabajar (con la organización) a costa de lo que se fuera así fuera la muerte, pero estábamos para lo que fuera”

En San José no es posible hablar de unos líderes tradicionales porque cuando se formó el proceso comunitario, esos dirigentes ya habían sido asesinados o desplazados. El proceso se fundamenta en los múltiples actores que decidieron acogerse individualmente al pacto de neutralidad. En los dos casos la violencia les deja lecciones como las siguientes: que no tenía sentido unirse a los grupos armados, que la guerra no era de ellos, que el ejército era un actor más en la guerra. Pero además de lecciones les deja tragedias y sufrimientos compartidos que hicieron de la resistencia, la única opción para mantener una vida digna en la región.

“Tengo 29 años y nunca he visto ni he oído otra cosa. Cada vez hay más historias de asesinatos, refugiados, desplazados. Mis primeros recuerdos se remontan al año 1975; yo tenía 5 años. Ese fue para mi el primer año en que supe de una masacre campesina. Atrapados entre la violencia del ejército y la de las milicias nos sentíamos completamente impotentes. Ya nos habíamos tenido que despedir tantas veces de los paisanos. Algunos asesinados, otros dados a la fuga. Antes éramos 3500, ahora quedamos 1200” (Entrevista).

La resistencia es motivada además en los dos casos por el interés de preservar la tierra y el trabajo de años seriamente amenazados por la guerra y la posibilidad del desplazamiento. También coinciden los actores de las dos iniciativas en resistir para evitar la continuación del sufrimiento y la pérdida de seres queridos. El sufrimiento conlleva además un deber moral con los muertos de hacer justicia y de garantizarle a los hijos un lugar mejor en donde vivir. Ese deber moral es particularmente importante en el caso de San José de Apartadó. Para los líderes de la ATCC la neutralidad consiste

además en una posición ética, en responder a su “naturaleza de campesino” caracterizada por ellos como: “dador de vida, trabajador y negociador”.

### 3. ¿Cuándo? Se resiste teniendo en cuenta las condiciones de oportunidad política

Si bien podemos evaluar algunos factores estructurales e individuales que ayudan a generar los procesos de resistencia civil no es claro si éstos, en sí mismos, son suficientes para la puesta en marcha de tales acciones. Los teóricos norteamericanos del proceso político y de la movilización de recursos<sup>40</sup> muestran que así la situación social del actor sea muy difícil, éste no va a poner en marcha un proceso de acción colectiva si no tiene una mínima seguridad de éxito (Bonamusa: 1994). Esa seguridad resulta de contar con algunos elementos del entorno (económicos, jurídicos, políticos, simbólicos, sociales), dentro de los cuales se ha hecho mayor énfasis en la disponibilidad de elementos políticos.

Se ha acuñado entonces el término “estructura de oportunidad política” entendida como “el grado de probabilidad que los grupos tienen de acceder al poder o influir en el sistema político”. (Varios: 1999). Existe un cierto consenso teórico en 4 dimensiones de la estructura de oportunidad política: 1. estabilidad e inestabilidad de las alineaciones entre las elites; 2. presencia o ausencia de aliados entre las elites; 3. grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado; 4. capacidad del estado y su propensión a la represión. (Varios: 1999, pp. 49-107). Es en los momentos en los que existen mayores probabilidades de influir en los sectores dominantes cuando las organizaciones generan repertorios de acción que muestran la fuerza del proceso al adversario, buscando mayores condiciones de interacción que permitan negociar alrededor de las reivindicaciones particulares. Estos momentos son denominados por Tarrow “fases de visibilidad”. (Tarrow: 1997)

Para los miembros de la ATCC el “mito fundacional” de su proceso organizativo se encuentra en la respuesta creativa que le dieron al ultimátum del ejército:

“En mayo (1987) empezó el acoso por parte del mismo ejército. Nos reunían en La India los sábados y domingos, que era cuando había más campesinos. Nos obligaban a ir a reuniones y nos decían que nos uniéramos al ejército, o que nos fuéramos con la guerrilla, o que nos fuéramos de la zona, o que nos moríamos. Eran las cuatro alternativas que nos daban. Nosotros nos encontrábamos en un callejón sin salida”

<sup>40</sup> Dentro de este grupo se cuentan autores como Tilly, Esinger o Tarrow.

Los habitantes del Carare propusieron entonces una quinta opción: quedarse en la zona sin unirse a algún grupo armado. Por su parte, los miembros de la Comunidad de Paz ubican el inicio de su experiencia en la firma del pacto de neutralidad:

“Cuando estábamos en San José se llegó la reunión para la firma de la neutralidad. Eso fue una celebración grandísima, vino gente de todos lados. Nadie quería firmar de primero; uno cogía y soltaba ese esfero. Al final nadie tampoco quería quedarse con ese papel (...) Era difícil pero era la única solución para seguir trabajando” (Entrevista).

Si bien la iniciativa y razones para resistir existieron en las dos comunidades por años, sólo se desarrollaron en el momento en que surgieron condiciones mínimas para que los procesos de resistencia tuvieran éxito. En los dos casos resultó fundamental la presencia de aliados influyentes, que les dieron cierta legitimidad a las demandas presentadas a las instituciones estatales y a los cuerpos armados. Estos aliados han sido generalmente organizaciones religiosas y no gubernamentales de carácter nacional e internacional.<sup>41</sup> Organizaciones que ante los escandalosos indicadores de violencia regional originaron una importante presión política con la creación de mecanismos contra la impunidad y para humanizar la guerra. Es importante también destacar que estos aliados al condenar la guerra y la acción de los grupos armados influyeron en el replanteamiento que hicieron las comunidades de su situación frente a los diferentes actores de poder local.

También resulta importante en los dos casos la existencia de una cierta apertura política, dada en el caso del Carare tanto por una inestabilidad pre electoral en la que entraban en juego múltiples intereses políticos<sup>42</sup> y militares como por las acciones políticas<sup>43</sup> de los paramilitares, intensificadas a partir de las múltiples condenas nacionales a sus acciones. En San José la apertura política estaba dada por la vigencia de un gobierno local de consenso, partidario de la defensa de la vida de los campesinos.<sup>44</sup> Esta apertura permitió una cierta flexibilidad frente a las propuestas comunitarias y en el caso de San José un respaldo y legitimación inicial.

<sup>41</sup> En su surgimiento la comunidad de paz estuvo acompañada por la Diócesis de Apartadó, organizaciones nacionales como el CINEP y Justicia y paz y organizaciones internacionales como Pax Christi. En el Carare no se contó inicialmente con un apoyo directo pero sí con una creciente movilización nacional y regional por el derecho a la vida y la paz en la zona.

<sup>42</sup> Se trataba de las elecciones populares de alcaldes.

<sup>43</sup> Tales como foros, marchas en las que pretendían legitimar su proyecto “anticomunista”. En La India plantearon la posibilidad de “un borrón y cuenta nueva” en lo referente a antiguos nexos con la guerrilla.

<sup>44</sup> Sobre el Consenso de Apartadó resulta interesante el libro de Marbel Sandoval (1997)

Sin embargo, en el surgimiento de las organizaciones influyó la inestabilidad en la correlación de fuerzas. En el Carare esta inestabilidad dio cierto espacio para que los campesinos pudieran presentar sus demandas frente a las diferentes instancias. En San José la inestabilidad constituyó más bien una restricción a la acción pues implicó mayores niveles de ataque contra la comunidad.<sup>45</sup> En esa medida la represión fue menor en el Carare que en San José de Apartadó. Los altos niveles de represión fueron una limitante en el caso de San José pero también una fuente de legitimidad para la comunidad misma y ante sus aliados externos.

Los diferentes escenarios que se definieron en las regiones, determinaron distintos modos en las organizaciones campesinas. En el Carare predominó la estrategia del diálogo<sup>46</sup> para solucionar los problemas de “convivencia” en una zona compartida, en San José de Apartadó predominaron la exigencia y la denuncia frente a los grupos armados que intentaban establecer un dominio ilegítimo en una zona neutral. La reacción a esta estrategia inicial fue diferente. Mientras en el Carare la guerrilla y el ejército aceptaron ciertos pactos con la ATCC<sup>47</sup>, en San José de Apartadó, los paramilitares, la guerrilla y el ejército respondieron con mayores niveles de violencia evidenciados en asesinatos selectivos, bombardeos y masacres.<sup>48</sup>

Los pactos establecidos en el Carare, sin embargo, no fueron estables pues estuvieron sometidos a las dinámicas y demandas estratégicas de la guerra. Esto llevó a nuevas acciones en contra de los líderes y base de la ATCC. Ante el incumplimiento de los pactos la Asociación incorporó nuevos mecanismos de confrontación como el debate público y la denuncia.<sup>49</sup> Sin embargo, estas acciones llevaron al asesinato de los líderes fundadores

---

<sup>45</sup> Inestabilidad dada por las confrontaciones por el dominio territorial, significó para la comunidad trece asesinatos, bloqueos paramilitares, siete desplazamientos de comunidades veredales, torturas, tres detenciones ilegales, 2 robos, bombardeos y desapariciones.

<sup>46</sup> Diálogos transparentes y masivos en las que no se buscaban culpables sino interlocutores con los que se pudiera llegar a soluciones concretas y no a mayor confrontación (Llano: 1996).

<sup>47</sup> La ATCC logró establecer pactos con la guerrilla en lo referente a la no prestación de servicios, no participación en reuniones políticas, no obediencia y no homicidios. Con el ejército solo fue posible obtener promesas de los altos mandos del ejército que no concordaron con la acción local de la institución

<sup>48</sup> En el primer año de funcionamiento de la comunidad se registraron cuarenta y siete homicidios, bloqueos paramilitares, un bombardeo, tres detenciones ilegales, tres desplazamiento, desapariciones forzadas y detenciones ilegales, entre otras (documentos de la comunidad, en <http://www.cdpsanjose.org>)

<sup>49</sup> Con el debate público la ATCC aprovechaba una ventaja comparativa que tenía frente a los grupos armados y es que podía mantener en público las mismas posiciones y argumentos que mantenía en privado. Un ejemplo de tales estrategias fue “el diálogo por la paz en Cimitarra”

de la Asociación.<sup>50</sup> Ante tal resultado decidieron retornar a los diálogos con todos los sectores armados y fortalecer la posición de neutralidad. Esta estrategia no tuvo la contundencia suficiente y fue cuestionada en los últimos años por algunos grupos armados.

En San José de Apartadó, por el contrario, la práctica de la denuncia pública se fortaleció a pesar de los costos. Se incorporaron además nuevas estrategias como el acompañamiento nacional e internacional, las denuncias internacionales, las alertas tempranas, entre otras.<sup>51</sup> Modos de actuar tendientes a condenar la acción de los grupos armados que lograron una cierta reducción de las agresiones, pero no pudieron acabarlas. Los actores de poder locales diversificaron sus formas de agresión: a las masacres, bombardeos y asesinatos selectivos, agregaron los bloqueos económicos, los señalamientos y las judicializaciones. Estas nuevas agresiones impusieron nuevas estrategias como la economía solidaria, la política de transparencia y la ruptura con la justicia.<sup>52</sup>

Es interesante constatar, además, que en los dos casos se han presentado interacciones diversas con el Estado y con cada grupo armado.

• *Con el Estado:* La ATCC, desde sus inicios, buscó un apoyo estatal y reivindicó su presencia militar y civil. San José de Apartadó ha exigido la presencia civil del Estado pero ha rechazado su componente militar en tanto considera al ejército como un actor más dentro de la confrontación, que compromete los procesos de neutralidad. La respuesta estatal no ha sido uniforme. La ATCC recibió en los primeros años, apoyo de varias instituciones gubernamentales del nivel nacional. Este apoyo sin embargo, fue desarticulado y estuvo condicionado por los cambios de gobierno. En el nivel local el apoyo “civil” ha sido limitado y ha dependido principalmente de los procesos electorales y de las diferentes redes clientelistas que soportan la política local. La inversión en la zona ha tenido el carácter de favor político pero no ha tenido la consistencia de las propuestas de desarrollo de la organización comunitaria.

En el caso de San José de Apartadó, se logró un cierto acuerdo de respeto del estado local y nacional hacia la comunidad en cuanto los principios del DIH la amparaban, pero nunca logró un apoyo estatal a nivel de inversión. Los programas de educación, salud y vivienda fueron limitados por las dinámicas de guerra y por las lealtades polí-

---

<sup>50</sup> Josué, Miguel y Saúl fueron asesinados junto con la periodista Sylvia Duzán el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra. Al respecto resulta interesante la crónica de María Jimena Duzán (1992, p. 284)

<sup>51</sup> Es interesante notificar que alrededor de la comunidad de paz existe una amplia red de organizaciones nacionales e internacionales que prestan apoyo político a través de denuncias, alertas y demandas a embajadas y gobiernos nacionales.

<sup>52</sup> La economía solidaria busca contrarrestar los bloqueos, la política de transparencia evitar los malentendidos difundidos por los grupos armados y la ruptura contrarrestar la ola de detenciones masivas.

ticas y militares de los alcaldes de turno. Es importante subrayar que el Estado ha sido renuente a reconocer el carácter de la comunidad como “población desplazada” lo que causaría obligaciones de inversión y de prestación de servicios. De otra parte ha provocado desde los niveles nacionales y locales pronunciamientos que cuestionan la neutralidad y efectividad del proceso comunitario

El comportamiento de los militares frente a estas dos experiencias de resistencia es aún más polémico. En el caso del Carare el ejército que ha sido reconocido por la Asociación como fuente de seguridad y protección, ha hecho presencia esporádica en la zona, a pesar de que en los primeros años actuó con renuencia frente a la propuesta civil. Su presencia sin embargo, no ha impedido el acelerado avance de los grupos paramilitares y de los cultivos de coca. En el caso de San José de Apartadó en donde el ejército ha sido considerado como un grupo armado más dentro de la confrontación, las relaciones han sido más complicadas. La comunidad ha denunciado un constante asedio por parte de la institución militar y su acción conjunta con los grupos paramilitares. De hecho, se acusa al ejército de graves agresiones contra la comunidad. Ante las denuncias y las restricciones establecidas por la comunidad los militares han respondido con señalamientos en contra de la comunidad, a la que consideran como un espacio vedado para la acción gubernamental.

- *Con los Paramilitares:* Las relaciones de los paramilitares con estas dos experiencias de resistencia civil se han caracterizado por la hostilidad. Sin embargo existen ciertos matices que es importante subrayar. Inicialmente en el Carare no se entablaron diálogos con estos grupos porque se los consideraba dependientes de la institución militar. De otra parte, los primeros líderes de la Asociación ante las crecientes amenazas de este grupo, lanzaron una campaña de denuncia de sus acciones y de sus relaciones con sectores políticos y económicos. La respuesta a esa campaña de denuncia fue el asesinato de los líderes. A partir de este hecho, la actitud de la Asociación hacia este grupo cambió, se entablaron diálogos y se garantizaron ciertas condiciones de respeto y convivencia. En consecuencia se redujeron las acciones violentas de estos grupos pero no de sus ataques contra la Asociación. Las agresiones fueron entonces más sutiles y tuvieron como objetivo la fragmentación de las solidaridades y del consenso en torno a la neutralidad existente entre los miembros de la asociación. Los chismes, los reclutamientos y sobre todo las ganancias ofrecidas a cambio de la siembra de la coca minaron a la Asociación en su base y han debilitado su posición en los diálogos.

En San José de Apartadó la hostilidad de los paramilitares se ha manifestado principalmente con agresiones que se han mantenido en los ocho años del proceso comunitario. Sólo en 1999 los paramilitares hicieron una declaración de respeto, presionados por de la comunidad internacional pero esta condena no redujo los hechos de violencia. Las agresiones aquí también han tenido el objetivo de minar las relaciones comunitarias. Como tales se han interpretado los reclutamientos, el pago de informantes, entre otras, pero estas tentativas han tenido menor impacto por la fuerte formación

política de los miembros de la Comunidad. Ante tales hechos no se ha abandonado la estrategia de denuncia como en el caso de la ATCC. La Comunidad ha sido además enfática al denunciar las estrechas relaciones de estos grupos con el ejército; de hecho conciben al ejército y a los paramilitares como un solo grupo. En el Carare, aunque estas relaciones son evidentes en la vida cotidiana de los habitantes, no se denuncian, de hecho se asumen como “normales”.

- *Con la Guerrilla:* En los dos casos la respuesta de los frentes presentes en las zonas de influencia de las experiencias comunitarias ha sido diferente. En el Carare la respuesta inicial del frente XI y XXIII fue con un discurso sobre el respeto hacia el proceso comunitario. Sin embargo, los ajusticiamientos de la guerrilla perturbaron la relación con la comunidad. Los hechos siempre se “aclararon” en los diálogos. Sin embargo, la actitud de la guerrilla ha cambiado en los últimos años por el avance paramilitar, por los cambios de comandantes, por el crecimiento de los cultivos de coca, entre otras razones. Ese cambio de actitud se ha puesto de manifiesto en la negativa a establecer diálogos con la Asociación), en las amenazas en contra del proceso comunitario, en los combates dentro de la zona de influencia y en la imposición de desplazamientos de miembros de la ATCC. En el caso de San José de Apartadó la respuesta inicial fue de rechazo al proceso al asimilarlo como una Convivir. Una vez se aclararon las diferencias del proceso de la Comunidad con el de las Convivir aparentemente se han reducido los ataques. Dentro de las estadísticas y denuncias de la comunidad, resultan considerablemente inferiores a los de los paramilitares. Sin embargo, la comunidad reitera constantemente denuncias en contra de desertores del V frente que han apoyado las agresiones de ejército y paramilitares

Al respecto de la temporalidad de los procesos de resistencia quedan entonces muchas preguntas

¿Cuál es el real grado de eficacia de los mecanismos de confrontación de las comunidades?

¿Cuál debería ser la respuesta estatal frente a los procesos de resistencia? ¿Hasta qué punto esta respuesta está limitada por las complejas dinámicas locales de poder? ¿Garantiza protección la presencia militar? ¿Cómo generar medidas de protección adecuadas para estos procesos?

¿Representan las experiencias de resistencia civil una alternativa de gobierno local? ¿Hasta cuando se resiste?

#### **4. ¿Cómo? Se resiste a base de organización, conciencia y recursos**

Más allá de los momentos de confrontación con los actores de poder vividos por los movimientos sociales (fases de visibilidad), existen largas etapas de fortalecimiento interno denominadas por Melucci “fases de latencia”. Fases en las que los movimientos buscan mantenerse en el tiempo, renovarse, permitir la participación de sus miembros y

cooptar militantes y ayudas. Tales estrategias han sido recogidas por los teóricos en tres procesos básicos: El primero se refiere al desarrollo y consolidación de formas de organización que permiten la participación de los miembros del movimiento; el otro proceso (2) a la construcción y consolidación de marcos de acción colectiva que permiten la definición de las reivindicaciones del movimiento dando paso a la identificación de los cursos de acción más adecuados y a procesos de construcción de identidad (Laraña:1999); finalmente (3) se habla de la movilización de recursos por medio de la cual el movimiento gestiona relaciones con el exterior que garantizan su éxito.

- *La organización*: Desde la perspectiva teórica la organización es importante para establecer relaciones con el exterior y para garantizar que el movimiento se expanda en el espacio y en el tiempo. A través de la organización se pueden lograr los objetivos, movilizar y obtener recursos, movilizar los miembros de base en actividades concretas, generar canales de comunicación con otros grupos y proponer estructuras estables de participación para los militantes (Bonamusa: 1994, pp. 54-66). La organización no es un esquema prefabricado que se sigue críticamente, es un mensaje para la sociedad que evidencia formas alternativas de abordar problemas sociales y organizarse para darles solución. (Laraña: 1999)

La resistencia individual parece imposible en los contextos en donde se desarrollan los dos procesos comunitarios. La organización entonces se constituyó en una base fundamental para legitimar y respaldar las demandas de las dos comunidades estudiadas. Sin embargo, se trata de estructuras organizativas distintas. La “Organización de Campesinos del Carare”, como inicialmente se denominaba, se constituye como asociación por la experiencia previa en esta forma organizativa (Juntas de Acción comunal, asociaciones de padres, asociaciones de productores) y porque perseguían objetivos específicos.

“La organización comunitaria no es un invento nuevo sino el redescubrimiento de nuestro pasado, por ello ante el abandono estatal de sus obligaciones constitucionales hemos dado paso a organizaciones sociales que lejos de desestabilizar la democracia, la perfeccionan día a día” (Entrevista, Citada por Hiller [1992])

La ATCC adopta inicialmente una estructura vertical dependiente de los líderes tradicionales de la comunidad y autores de la iniciativa de resistencia. Esta estructura contempla una moderada y voluntaria participación de la comunidad consistente en el mantenimiento de los compromisos establecidos con los grupos armados y en la colaboración con los diferentes comités comunitarios (de vigilancia, educación, salud, mujeres, deportes, asentamiento, comercialización, aserradores). Para afiliarse sólo era necesaria la recomendación de algún directivo. (Estatutos ATCC: 1987)

Esta estructura vertical y con pretensiones de afiliación masiva, pronto presentaría dificultades: se produjo una dependencia excesiva de los líderes tradicionales, se centralizaron el poder y las funciones y se presentó discontinuidad entre los diferentes periodos presidenciales. De otra parte, la fácil afiliación sumada a la reducción de los niveles de violencia hizo flexible y débil el compromiso de los miembros, como se vio en su escasa participación en espacios como los comités y en el desarrollo de transacciones con los diferentes grupos armados.<sup>53</sup> Fue necesario replantear la estructura organizativa, se propuso entonces un consejo de asesores, un nuevo modelo económico y una asamblea de delegados. (Estatutos ATCC: 2001) Sin embargo, los cambios estatutarios no lograron resolver los problemas organizativos.

La Comunidad de Paz, por su parte, propuso una estructura organizativa en la que se retomaron las experiencias comunitarias anteriores y se replicaron procesos de otras latitudes.<sup>54</sup> El proceso organizativo fue planeado por las ONG y los campesinos. (CINEP: 2001) Acudieron a una forma fundamental de organización social: la comunidad, en la medida en que la base de la relación entre los miembros no es el interés ni el logro de un objetivo particular sino la defensa de una posición ética, política y moral compartida. (Lanchero: 2000)

Se trata entonces de una estructura horizontal basada en un consejo interno coordinado por líderes temporales que rotan constantemente. Con esta medida, la comunidad ha intentado evitar los problemas de centralización y de la delegación del poder en una sola persona. (Comunidad de Paz: 1998) La estructura horizontal estimula además un compromiso por parte de los miembros de la comunidad. Compromiso que consiste en el mantenimiento del pacto de neutralidad y en la colaboración con las labores comunitarias lideradas por los comités y grupos de trabajo. La afiliación a la comunidad es entonces más exigente pues requiere de una etapa de formación previa.

Artículo 2: las personas de la comunidad de paz comenzaran a ser miembros cuando el consejo interno les haga entrega de manera oficial del carnet y luego de haber firmado y dejado su huella como muestra de la aceptación de dicho proceso. Para esto se requiere: a) Conocer la declaratoria y el proceso; b) No ser parte del conflicto; c) Aceptar el reglamento de la Comunidad de Paz; d) Conservar responsablemente los signos de la comunidad e) Comprometerse con el desarrollo del proceso esencialmente en los trabajos comunitarios (Comunidad de paz: 1998).

---

<sup>53</sup> Entrevistas y memorias Congreso Campesino por la paz: 2001.

<sup>54</sup> Como el de las zonas protegidas de Dacca (1971), Nicosia (1974), Saigon (1975), Nicaragua (1979), Yugoslavia (1991) y Filipinas (1988) o las zonas neutrales en Madrid (1936) y Shangai (1937).

Esta estructura horizontal si bien ha permitido mayor consistencia también ha generado algunas dependencias y sobre todo un cierto agotamiento de algunos miembros pues pertenecer a la comunidad implica prácticamente replantear el proyecto de vida.

- *Marcos De Acción Colectiva*: Para que la organización funcione es necesario que exista un consenso alrededor de sus objetivos, una identidad frente a la propuesta comunitaria (Laraña: 1999); propuesta que se materializa en discursos que (en los dos casos) identifican la confrontación como una situación que es injusta, ilegítima y costosa.

“desde antes de 1970 hemos visto como la violencia solo nos deja miseria, incertidumbre, viudas, huérfanos, desaparecidos, fincas abandonadas, desesperación, desconfianza y en ningún momento habíamos encontrado nada para la solución de nuestros problemas” (Discurso de Josué Vargas [García: 1996]).

En el caso de San José, el discurso afirma además que esa guerra es posible por un estado precario y agresor.

“Considerando que las medidas estatales para el control y judicialización de los actores armados han sido impunes, por tanto, no han impedido ni su crecimiento ni su accionar dejando a las comunidades en un grado máximo de exposición y riesgo” (ATCC: 1998).

Es importante tener en cuenta que en la propuesta de San José hay una intervención de ONG y de la Iglesia. Los discursos se sustentan en las experiencias comunitarias (redes, trabajo, autonomía, organización previa), resignifican situaciones de violencia de larga data y agregan nuevos elementos al proyecto campesino como la neutralidad. Esos discursos se dirigen no sólo a los habitantes de las zonas de influencia sino también a los grupos armados, al estado local y nacional y aquellos que podrían solidarizarse con la experiencia.

Para lograr un consenso alrededor de la propuesta de resistencia, las dos organizaciones proponen estrategias similares como talleres de formación, reconstrucción de la historia personal y comunitaria, celebraciones, construcción de símbolos. En el caso de San José de Apartadó, sin embargo, cobra particular relevancia la conmemoración de la memoria de los muertos. La memoria se constituye en un eje movilizador de la comunidad a través del cual se busca justicia. La comunidad de paz utiliza los grupos de trabajo como estrategia para fortalecer lazos solidarios. En el Carare los rumores y las discusiones públicas se aprovechan como mecanismo para difundir las apuestas e ideales comunitarios. Estas estrategias cambian en la medida en que se desarrolla el proceso organizativo, en ciertos momentos funcionan pero en otros pueden irse incluso en contra de la organización.

El proceso de construcción y difusión de discursos, y en general el proceso comunitario mismo, generan unas identidades en los miembros de las organizaciones. En los dos casos se reafirma la condición de campesinos trabajadores, dadores de vida. La lucha de las dos organizaciones es por la posibilidad de ser campesinos, de quedarse trabajando en el área rural y de rechazo del desplazamiento a la ciudad. También reivindican su condición de civiles, neutrales y autónomos frente a los dominios de los armados. Esas identidades se soportan en una oposición común a la guerra y sus consecuencias. Los miembros de la comunidad de paz, sin embargo, no solo proponen un discurso de oposición a la guerra, también se oponen a la impunidad, al modelo de desarrollo excluyente, a un estado “ineficiente y agresor”, a las bases estructurales de la guerra. Sus luchas entonces van más allá de reivindicaciones locales. Para los miembros de la ATCC se trata de una lucha por la posibilidad de ser campesino en Colombia. Para la comunidad de paz se trata de una concepción del mundo que defiende la vida, la dignidad y la justicia y que se resiste frente a la guerra, el neoliberalismo y los dominios verticales.

“El campesino honesto y trabajador es un hacedor de vidas y un alimentador de vidas y no puede convertirse en un cegador de vidas. Por eso nos organizamos con los brazos en alto en señal de rechazo a esas actuaciones equívocas tanto de quienes buscan el poder como de quienes lo defienden” (Entrevista La India).

• *Mobilización de recursos*: Un proceso de resistencia necesita construir redes de apoyo a través de las cuales pueda crear, intercambiar y transferir “recursos” que posibiliten el éxito de la movilización social. Recursos que pueden ser de carácter interno y externo, materiales y no materiales (Bonamusa: 1994). Se habla entonces de recursos jurídicos, políticos, mediáticos, técnicos, económicos y otros de carácter interno (Urán: 2003).

Esto se puede ver claramente en los dos procesos estudiados, en los que necesariamente las comunidades construyen alianzas. Sin embargo las alianzas y los recursos demandados son distintos. En el caso de la ATCC se demandan principalmente apoyos de tipo económico para el funcionamiento del proyecto de desarrollo. Las búsquedas de apoyo político son más tímidas ya que las labores de diálogo y concertación con los diferentes actores de poder regional han sido asumidas por la organización de manera autónoma. La Comunidad de Paz, por su parte, demanda más apoyos políticos que económicos, ya que la posibilidad de mantener el proceso depende de la visibilidad pública de la situación de la comunidad. Sus actividades fundamentales no son sólo productivas sino también jurídicas, políticas y educativas.

Los dos procesos han contado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. En el caso de la ATCC el apoyo internacional consistió principalmente en el reconocimiento político y el fomento de proyectos productivos.

Sin embargo, este apoyo no tuvo continuidad y se realizó sin suficiente acompañamiento a la asociación. El apoyo internacional a la Comunidad de Paz es más político, genera una presión al Estado por las violaciones de derechos humanos que se cometen en el corregimiento. De otro lado, en lo económico más que enviar recursos el apoyo internacional ha consistido en garantizar espacios de intercambio y comercio justo. En cuanto al apoyo de las ONG ha sido mayor en el caso de la ATCC en donde constantemente llegan propuestas de organizaciones. Sin embargo, estas se caracterizan por su intermitencia y ambigüedad. Se trata de propuestas que obedecen más a las dinámicas internas de las ONG que a las necesidades de la Asociación. Por esta razón la comunidad de paz ha limitado el apoyo de las ONG al proceso. Su apoyo se restringe en la medida en que viole la autonomía de la comunidad.

La ATCC ha recibido apoyos de instituciones del Estado en lo referente al fomento de proyectos productivos, sin embargo estos apoyos se han caracterizado por el constante cambio de funcionarios, la falta de seguimiento de las ayudas y los intereses del poder local. La Comunidad de paz, por su parte, difícilmente recibe un apoyo oficial al considerar al Estado como actor en la guerra. La comunidad de paz ha contado con apoyo de la iglesia y de corporaciones jurídicas. Finalmente es importante destacar que en los últimos años las experiencias de resistencia han empezado a crear alianzas entre ellas, eso permite intercambiar experiencias y adquirir poder políticamente.

## 5. ¿Conclusiones?

Los procesos de resistencia estudiados se desarrollan en contextos de frontera, lo que implica resignificar complejos panoramas regionales y locales caracterizados por la marginalidad, la extracción, el refugio y la violencia. Los procesos de resistencia muestran entonces la posibilidad de construir solidaridad, autonomía y dignidad en la frontera.

Se trata de procesos que si bien son el resultado inmediato del ascenso de la confrontación, obedecen a una guerra que va más allá de coyunturas y que se encuentra anclada en todos los niveles de la estructura social. A través de las acciones de resistencia se reivindicán las formas históricas de organización comunitaria; se defiende la economía campesina; se promueven formas locales de gobierno, participación y justicia alternativas a las estructuras estatales y armadas; y se declara una posición ética frente a la guerra y la memoria de los muertos.

Si bien la iniciativa y razones para resistir existieron en las dos comunidades por años, sólo se desarrollaron en el momento en que existieron condiciones mínimas de éxito. Condiciones dadas por la existencia de aliados, circunstancias de apertura política, inestabilidad en la correlación de fuerzas y particulares grados de represión. Se configuran así escenarios diversos en los que las comunidades proponen estrategias de diálogo, debate

público, denuncia, acompañamientos externos, alertas tempranas, rupturas con la justicia, política de transparencia, entre otras. Estrategias que se transforman en la interacción con los actores de poder estatal y armado. Los resultados de tales interacciones han sido diversos, han dejado desde éxitos políticos hasta grandes costos en materia de vidas.

Más allá de las estrategias de visibilidad frente a los actores externos, los procesos de resistencia deben desarrollar procesos internos de organización relacionados con: la construcción de una estructura organizativa adecuada; la construcción de un consenso alrededor de la neutralidad y la lucha por el trabajo, la vida y la paz; y la movilización de recursos económicos, jurídicos, políticos, mediáticos y técnicos para garantizar el funcionamiento de las organizaciones. A través de su propuesta organizativa los procesos de resistencia civil muestran entonces “formas alternativas de abordar problemas sociales (como la violencia) y de organizarse para darles solución”.

Pero si bien el trabajo de investigación deja algunas claridades sobre dónde, por qué, cuándo y cómo se resiste, no queda claro ¿hasta cuándo se resiste? en contextos profundamente turbulentos y que implican grandes costos.

No puedo terminar el presente artículo sin confesarle al lector que tras concluir el trabajo de grado no sólo me quedaron preguntas abiertas sobre los procesos de resistencia, también sobre el sentido y pertinencia metodológica de mi propuesta investigativa. Compartir estas preguntas tal vez sea el primer paso para responderlas. Como lo muestra Maria Teresa Uribe, la investigación en contextos de conflicto deja profundos dilemas éticos. ¿Cuál es el papel de la investigación en comunidades agobiadas por la guerra?, ¿Cuál es el impacto de nuestras palabras sobre las gramáticas del conflicto?, ¿Hasta qué punto esas gramáticas permean nuestros resultados de investigación?, ¿Qué implicaciones tienen nuestras metodologías y resultados para los pobladores que quedan en la región?, ¿Qué significa recuperar la memoria de un proceso?, ¿Hasta donde llega el compromiso del investigador?, ¿Cuáles son los impactos de lo que se publica?, ¿Para quién escribimos?, ¿Qué respuestas damos a las comunidades?. Dejo entonces estas preguntas como una invitación para aquellos que desarrollen trabajos en zonas de conflicto a dudar siempre en sus investigaciones de lo qué hacen y de cómo lo hacen.

### GLORIA INÉS RESTREPO

Socióloga, Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá  
gloriainesrestrepo@gmail.com

Recibido en: Septiembre de 2006

Aceptado en: Octubre de 2006

## Referencias bibliográficas

- ACOSTA, M. T. (1993) *Colonización, convivencia y etnicidad en la región de los ríos Minero y Carare*, Bogotá: Depto. de Antropología, U. Nacional de Colombia.
- ALONSO, M. (1997) *Conflicto armado y configuración regional*, Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- AYALA, H. (1999) *Caminos de historia en el Carare-Opón*, Bogotá: Litográficas Calidad.
- BEJARANO, A. (1988) “La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá”, En: *Análisis político*, No. 4.
- BONAMUSA, M. (1994) “Movimientos sociales: organización y estructura de oportunidad política”. *Análisis político* No. 23.
- BOTERO F. (1990) *Urabá: colonización, violencia y crisis del Estado*, Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- CINEP (2001) *Informe de Sistematización: Hacia una metodología para construir comunidad en situaciones de conflicto*, Bogotá.
- COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ (1998) “Historia de la comunidad de paz”, En: *Revista justicia y paz*, No. 8.
- CORPOURABÁ. *Plan de desarrollo de Apartadó 1990-2005*.
- DE ROUX, F. (2002) Colombia es un proyecto viable. *Universitas Xaveriana*, No. 28, p. 14-18.
- DUQUE, J. y CARMONA, P. (1996) *Monografía de la especialización en Gerencia de desarrollo social*, Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Trabajo Social.
- DUZÁN, M. J. (1992) *Crónicas que matan*, Bogotá: Tercer Mundo.
- ESTRADA, M. (1985) *Confrontación agraria en el Magdalena Medio*, Bucaramanga: Ediciones Biblioteca Gabriel Turbay.
- GARCIA, A. (1996) *Hijos de la violencia: campesinos de Colombia sobreviven a “golpes” de paz*, Madrid: Los Libros de la Catarata.
- GARCÍA, C. (1996) *Urabá: región, actores y conflicto 1960-1990*, Bogotá: CEREC/ INER/ Universidad de Antioquia.
- GARCÍA, C. (2003) “Paradojas de los conflictos violentos. Legado del Saber 06”, En: <http://bicentenario.udea.edu.co/legado>
- GÓMEZ, A. L. 1992 *Economías campesinas en el Corregimiento de la India*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- GONZALEZ, F., VÁSQUEZ, T. y BOLÍVAR, I. (2002) *Violencia política en Colombia : de la nación fragmentada a la construcción del estado*, Bogotá: CINEP.
- HERNÁNDEZ, Esperanza y SALAZAR, Marcela. (1999) *Con la esperanza intacta*, Bogotá: OXFAM.
- HERNÁNDEZ, Esperanza (2004) *Resistencia civil artesana de paz*, Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

- HERNÁNDEZ, J. (2002) "La resistencia civil en caliente", En: *Sociedad y economía*, No. 2, pp. 25-46.
- HILLER, S. (1992) *La ATCC: de la pacificación social al desarrollo económico*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
- LANCHERO, E. (2000) *El caminar de la resistencia: una búsqueda histórica*. Bogotá: Editorial Códice.
- LARAÑA, E. (1999) *La construcción de los movimientos sociales*, Madrid: Alianza Editorial.
- LLANO ÁNGEL, H. (1996) "Violencia y reconciliación en Colombia: la experiencia de la Asociación De Trabajadores Campesinos del Carare", En: *Universitas Xaveriana* (Cali) No. 12.
- LÓPEZ, C. (1991) *Investigaciones arqueológicas en el Magdalena Medio: cuenca del río Carare (Departamento de Santander)*, Bogotá: Banco de la Republica/ Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales.
- LOZANO, F. (2005) *Desarraigos e imaginarios religiosos en la construcción de ciudad. El caso de Barrancabermeja* en BELLO, Martha; VILLA, Martha (2005) *El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicas*, Medellín: REDIF.
- MARTÍN, G. (1986) *Desarrollo económico, sindicalismo y proceso de paz en Urabá*, Bogotá: Universidad de los Andes.
- MEDINA C. (1990) *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación. El caso "Puerto Boyacá"*, Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos.
- MINGORANCE F. et al. (2004) *El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorialidad y derechos humanos*, Bogotá: Diócesis de Quibdó y Human Rights Everywhere.
- MOLANO, A. (1989) "Colonos, estado y violencia", En: *Revista Foro*, No. 9, Bogotá: Fundación Foro por Colombia.
- MONTOYA, G. (2001) *Desarrollo social en comunidades víctimas de violencia político-social en la zona centro de la subregión de Urabá, Colombia: Una comprensión que genera paz*, Medellín: Universidad de Antioquia.
- MURILLO, A. (1999) "Historia y sociedad en el Magdalena Medio", En: *Controversia*, No. 174.
- ORTIZ, C. (1999) *Urabá: tras las huellas de los inmigrantes 1955-1990*, Bogotá: ICFES.
- OSLENDER, U. (2002) "Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una 'espacialidad de resistencia'", En: *Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 115.
- PARSONS, James. (1996) *Urabá, salida de Antioquia al mar: Geografía e historia de su colonización*, Bogotá: Banco de la Republica/El Ancora Editores.
- PÉCAUT, Daniel (2001) *Guerra contra la Sociedad*, Bogotá: Editorial Planeta
- PRADA, E. y SALGADO, C. (2000) *Campesinado y protesta social en Colombia (1980-1995)*, Bogotá: CINEP.

- RAMÍREZ, W. (1997) *Urabá: los inciertos confines de una crisis*, Bogotá: Planeta.
- \_\_\_\_\_ (1993) “Estado y crisis regional: el caso de Urabá”, En: *Análisis político*, No. 20.
- RAMOS, Arístides. (2000) Los caminos al río Magdalena. La frontera del Carare y del Opón: 1760-1860. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
- REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. *Estadísticas Electorales 1972, 1974, 1976, 1978*.
- REMENTERÍA, I. (1986) *Hipótesis sobre la violencia reciente en el Magdalena Medio en Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá: Fondo Editorial Cerec.
- RÍOS Molina, Carlos Andrés. *Religión y conflicto en el Urabá Antioqueño: informe final*, Bogotá: Fundación para la Promoción de la Investigación.
- RODRÍGUEZ, A. (1982) *El Carare: colonización y problemática social*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- ROLDÁN, M. (1998) “Violencia, colonización y la geografía de la diferencia cultural en Colombia”, En: *Análisis político*, No. 35.
- ROMERO, M. (2003) *Paramilitares y autodefensas: 1982-2003*, Bogotá: IEPRI/ Universidad Nacional de Colombia.
- \_\_\_\_\_ (2004) Los trabajadores bananeros de Uraba: de «subditos a ciudadanos»? en VARIOS AUTORES. *Emancipación social y violencia en Colombia*. Editorial Norma, Bogotá.
- SALGADO, Henry (1992) *Del conflicto social a la disputa territorial: el caso del Urabá Antioqueño (tesis de grado)*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- SANDOVAL, M. (1997) *Gloria Cuartas: por qué no tiene miedo*. Bogotá: Temas de Hoy.
- SANZ DE SANTAMARÍA, A. (1998) “El camino hacia la paz ¿Negociación y estrategia o comprensión y confianza?”, En: *Revista de estudios sociales*, No. 2.
- SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL. SECCIÓN DE MOVILIDAD HUMANA (2001) *Urabá: desplazamiento forzado en Antioquia*, Bogotá: Editorial Kimpres.
- STEINER, C. (2000) *Imaginación y poder el encuentro del interior con la Costa en Urabá, 1900-1960*, Medellín: Universidad de Antioquia.
- \_\_\_\_\_ “Héroes y banano en el golfo de Urabá: la construcción de una frontera conflictiva”, En: SILVA, R. (ed.) *Territorios, regiones y sociedades*, Cali: U. del Valle.
- THOREAU, H. D. (1987) *Desobediencia civil y otros escritos*, Madrid: Ediciones Tecnos.
- URÁN O. A. (2003) *Acciones colectivas y movimientos sociales: elementos para su análisis y gestión*. Medellín: Instituto Popular de Capacitación.
- URIBE DE HINCAPIÉ, M. T. (1992) *Urabá: ¿Región o territorio? un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad*, Medellín: CORPOURABÁ/INER/U. de Antioquia.

\_\_\_\_\_ (2004) "Emancipación social en un contexto de guerra prolongada. El caso de la comunidad de Paz de san José de Apartadó", En: VARIOS AUTORES *Emancipación social y violencia en Colombia*, Bogotá: Editorial Norma.

VARGAS, A. (1992) *Magdalena Medio santandereano: colonización y conflicto armado*, Bogotá: Cinep.

VARIOS AUTORES (1999) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas: oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Istmo.

\_\_\_\_\_ (1994) *Un mundo que se mueve como el río: historia regional del Magdalena Medio*, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología/Plan Nacional de Rehabilitación.

\_\_\_\_\_ *Historia Local y Regional Urabá Antioqueño. Programa de historias locales en regiones*, P. N. R.: proyecto Urabá.

ZAMORA, G. L. (1983) *Los moradores de la represión: en el Magdalena Medio*. Bogotá: Cinep.